



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

SENTENCIA TC/0391/17

Referencia: Expediente núm. TC-04-2014-0291, relativo a recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Mallid Giovanni Mustafá Marte y Eduardo Robinson López contra la Sentencia núm. 306, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los doce (12) días del mes de julio del año dos mil diecisiete (2017).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Samuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución, y 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:

I. ANTECEDENTES



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1. Descripción de la decisión recurrida

La decisión objeto del presente recurso de revisión constitucional es la Sentencia núm. 306, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014).

Dicha sentencia rechazó el recurso de casación interpuesto por Mallid Giovanny Mustafá Marte y Eduardo Robinson López contra la Sentencia Laboral núm. 426/2012, dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial Santiago el veintidós (22) de noviembre de dos mil doce (2012), en razón de la demanda laboral incoada por los referidos señores en contra de la empresa GM Knits, S.A.

En el expediente no existe constancia de notificación de la referida decisión a la parte recurrente, Mallid Giovanny Mustafá Marte y Eduardo Robinson López.

2. Presentación del recurso de revisión constitucional

El ocho (8) de octubre de dos mil catorce (2014), la parte recurrente interpuso un recurso de revisión constitucional contra la referida sentencia núm. 306.

Dicho recurso fue notificado oportunamente a la parte recurrida mediante Acto núm. 1701-2014, instrumentado por Jian Carlo José Peña, alguacil de estrados de la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial Santiago el trece (13) de octubre de dos mil catorce (2014).

Asimismo, el treinta (30) de octubre de dos mil catorce (2014), la parte recurrida hizo depósito oportuno de su escrito de defensa, notificándolo a la parte recurrente el cuatro (4) de noviembre de dos mil catorce, mediante Acto núm. 1966-2014, instrumentado por Manuel A. Estévez T., alguacil de estrados de la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial Santiago.



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El referido recurso de revisión, el escrito de defensa y los documentos que les acompañan fueron remitidos a este tribunal el once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014).

3. Fundamentos de la sentencia recurrida

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia fundó su decisión en los motivos que se sintetizan a continuación:

Considerando, que nuestra Suprema Corte de Justicia en funciones de Tribunal Constitucional, declaró acorde la Constitución la Ley 187-07, del pasivo laboral (sent. núm. 2, 13 de agosto de 2008, B. J. núm. 1173) y nos expresa en el punto objeto del recurso, “c) a que la referida Ley 187-07, presenta una nueva realidad estableciendo un límite, (primero de enero de 2005), a partir de cuándo se computarán las prestaciones laborales de los trabajadores que se encontraren en la situación reglamentada por la ley, lo que descarta la posibilidad de que después de esa fecha la liquidación anual libere al empleador de ese cómputo, al momento de la terminación definitiva del contrato de trabajo”. En el caso de que se trata haciendo uso de la mencionada ley y luego de un examen de la pruebas sometidas, la corte a-qua determinó acoger como fecha de ingreso de los hoy recurrentes a la empresa el día 6 de enero del 2003 y el 7 de enero del 2003 y la fecha de terminación 16 de abril del 2007 y 24 de abril de 2007, evaluación acorde a la ley y a la jurisprudencia, sin que se advierta ninguna desnaturalización por lo cual, en ese aspecto, los medios planteados carecen de fundamento y deben ser desestimados;

Considerando, que el establecimiento del monto del salario de un trabajador demandante en pago de prestaciones laborales, es una cuestión de hecho a cargo de los jueces del fondo. En la especie, el tribunal a-quo, dio por establecido el salario luego de examinar la integralidad de las



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

pruebas aportadas y el alcance de las mismas, valorando las que entendía más verosímiles, coherentes y sinceras, lo cual entra dentro de la facultad soberana de los jueces del fondo que escapa al control de casación, salvo desnaturalización, sin evidencia de ésta en el presente caso;

Considerando, que en el caso en cuestión no se violenta el principio de la seguridad jurídica que se relaciona con la expectativa legítima de quienes son justiciables a obtener para una misma cuestión una respuesta inequívoca de los órganos encargados de impartir justicia, (STC 158/1985, 2 de noviembre, F.J. n. 4) dictando una sentencia como en el caso según la norma adecuada para resolver la cuestión planteada;

Considerando, que en la especie no hay violaciones a los principios que rigen la materia laboral, ni a las disposiciones del artículo 69 de la Constitución Dominicana, que tienen por finalidad la protección de los derechos fundamentales del proceso, la tutela judicial efectiva y garantizar la seguridad jurídica como una meta del Estado Social de Derecho;

Considerando, que el estudio de la sentencia se determinó que la parte recurrida en el examen de las pruebas aportadas estaba cumpliendo con las obligaciones derivadas de la Ley 87-01 y en ese tenor dictó su fallo, sin que se evidencie violación a las mismas o inexactitud material de los hechos, en consecuencia (sic) dichos medios carecen de fundamento y deben ser desestimados y con ellos rechazado el presente recurso de casación.

4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión

La parte recurrente, Mallid Giovanni Mustafá Marte y Eduardo Robinson López, pretende que se anule la referida decisión, para lo cual alega, entre otros, los motivos siguientes:



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

- a. Los recurrentes laboraron para la recurrida mediante contrato por tiempo indefinido: Mallid Giovanni Mustafá Marte, desde el siete (7) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) hasta el dieciséis (16) de abril de dos mil siete (2007), esto es durante siete (7) años, siete (7) meses y nueve (9) días; y Eduardo Robinson López, desde el treinta (30) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997) hasta el veintitrés (23) de abril de dos mil siete (2007), esto es durante nueve (9) años, nueve (9) meses y veinticuatro (24) días.
- b. En las fechas antes indicadas, tuvo ruptura el contrato de trabajo, a través de un desahucio ejercido por la recurrida. Durante el período laboral, los recurrentes estuvieron bajo los efectos negativos de la práctica de liquidación periódica, hecho el cual se consumaba el mes de diciembre de cada año, por lo que el treinta (30) de mayo de dos mil siete (2007) demandaron en reclamación de la parte completa de prestaciones laborales y demás derechos adquiridos, tales como salarios por descanso semanal, horas extras, daños y perjuicio por incumplimiento de las leyes.
- c. El asunto recorrió las instancias correspondientes, y en ocasión del recurso de casación que dio lugar a la sentencia impugnada, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia decidió rechazarlo.
- d. El recurso de revisión es admisible, pues se funda en la violación, en perjuicio de los recurrentes, a los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley, al derecho a una tutela judicial efectiva y al debido proceso por falta de motivación sobre el conflicto de leyes que se planteó, así como los derechos económicos que se desprenden del desahucio, afectando así el derecho al trabajo, a un salario justo y digno, conforme a los artículos 7, 8, 9, 62.7, 68, 69 y 110 de la Constitución. Se verifican los requisitos establecidos en el artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, pues las violaciones fueron invocadas oportunamente, se agotaron las vías recursivas correspondientes sin que se subsanaran las violaciones que se imputan de manera inmediata a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia y a la Corte de Apelación. Además, el asunto tiene especial trascendencia, pues el preciso que el



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tribunal Constitucional se pronuncie sobre un problema jurídico de trascendencia social, política y económica, como es la inadecuada aplicación retroactiva de la ley 187-07 en perjuicio de la clase trabajadora, cuando ya se trata de derechos adquiridos.

e. Aclaremos que contrario a los argumentos dados por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, nuestra intención no es –ni nunca ha sido– postular por la inconstitucionalidad de la Ley núm. 187-07, sino que sostenemos que en la especie esa ley no se podía aplicar de manera retroactiva a las demandas intentadas previo a su entrada en vigencia. No cuestionamos la constitucionalidad de la ley, sino a la determinación de su alcance en el tiempo.

f. Así la violación a los principios de irretroactividad de la ley y seguridad jurídica se verifican pues, como se explica, la Ley núm. 187-07, data del nueve (9) de agosto de dos mil siete (2007), mientras que la demanda laboral que dio origen al conflicto fue incoada anteriormente, el treinta (30) de mayo de dos mil siete (2007).

g. Pretender aniquilar demandas laborales incoadas a la luz de principios que protegen y garantizan derechos ya adquiridos, se constituye en una negación a la seguridad jurídica y en arbitrariedad estatal. Una ley nueva no puede afectar derechos adquiridos, como son aquellos que se derivan del desahucio.

h. Ni la Corte de Apelación del Departamento Judicial Santiago, ni la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia ponderaron que la demanda introductiva se interpuso con antelación a la Ley núm. 187-07.

i. La decisión viola la tutela judicial efectiva como derecho fundamental, así como principio y garantía de los derechos fundamentales, pues no se dio respuesta a los argumentos de la parte recurrente, lo que se constituye en un defecto sustantivo.



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

j. Además, se viola el debido proceso y falta de motivación ya que ni la Corte de Apelación ni la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia se detuvieron a ponderar el alegato de que la Ley núm. 187-07 no se aplicaba en este caso, pues se trataba de una demanda laboral incoada antes de que entrara en vigencia la referida ley.

k. Finalmente, las referidas violaciones al principio de irretroactividad de la ley, a la seguridad jurídica, y al debido proceso por falta de motivación de la decisión impugnada, ante una tutela judicial fallida, violenta el derecho fundamental al trabajo, a un salario justo y digno de los recurrentes, por lo que, sin la actuación del Tribunal Constitucional, tales violaciones serán perennes.

5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión

La parte recurrida, GM Knits, S.A., pretende que se declare inadmisibile el recurso, para lo cual alega, entre otros, los motivos siguientes:

a. El argumento de la parte recurrente, de que la Ley núm. 187-07 no aplica a ese caso por atentar contra la seguridad jurídica es un sofisma para confundir al Tribunal Constitucional, pues ellos mismos afirman que la ley no entra en conflicto con nuestro ordenamiento jurídico.

b. Pero ninguna ley prohibía la liquidación anual, tal y como lo advirtió la Suprema Corte de Justicia mediante sentencia del trece (13) de diciembre de dos mil siete (2007), la cual tiene carácter *erga omnes* y adquirió la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, y en la cual también se consagró la constitucionalidad de la referida ley núm. 187-07.

c. A la parte recurrente le ha costado diferenciar la aplicación inmediata de la ley con su efecto retroactivo, pues la valoración de derechos adquiridos y simples expectativas es el único sistema que disponemos para determinar cuando una ley



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

está siendo retroactiva, es decir, está violando derechos adquiridos bajo una legislación anterior, los cuales han entrado al patrimonio de los perjudicados por la nueva ley. Pero la nueva ley toca situaciones formadas con anterioridad.

d. La Ley núm. 187-07 es de orden público económico y fue votada por un interés social y económico determinante para el país, con el objeto de salvaguardar fuentes de empleo, y empresas que habían ejercido la liquidación anual como práctica y que se vieron afectadas por la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia el trece (13) de agosto de dos mil ocho (2008).

e. El recurso es inadmisibles, no sólo porque no se ha violado ningún derecho fundamental, sino porque el recurso carece de especial trascendencia y relevancia constitucional

6. Pruebas documentales

En el trámite del presente recurso en revisión, el documento probatorio más relevante depositado es, entre otros, la copia de la Sentencia núm. 306, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014).

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

7. Síntesis del conflicto

Conforme a los documentos depositados en el expediente, Mallid Giovanny Mustafá Marte y Eduardo Robinson López laboraron para la empresa GM Knits, S.A., mediante contrato de trabajo por tiempo indefinido que tuvo ruptura en razón de desahucio ejercido por la empresa, a la cual demandaron en reclamación de la parte completiva de prestaciones laborales y demás derechos adquiridos el treinta



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

(30) de mayo de dos mil siete (2007). Dicha demanda fue desestimada en las instancias correspondientes al orden judicial. Apoderada de un recurso de casación incoado por los referidos señores, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia lo rechazó, mediante la resolución objeto de revisión constitucional.

8. Competencia

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso, en virtud de lo que disponen los artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 9 y 53 de la Ley núm. 137-11.

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional

Este tribunal declara que el presente recurso es admisible por las siguientes razones:

a. El artículo 53 de la Ley núm. 137-11, establece que el Tribunal Constitucional tiene la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad al veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), como el caso de la sentencia núm. 306, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014).

b. El artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, establece que el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales es admisible cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental, como la derivada de la violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso por la falta de motivación de las decisiones, los principios de irretroactividad de la ley y de seguridad jurídica, así como la afectación al derecho al trabajo; principios, garantías y derechos fundamentales cuya vulneración arguye la parte recurrente, por motivos que ameritan un minucioso análisis por parte de este tribunal constitucional.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

c. Para dicho análisis, es preciso que, además de verificarse la causal dispuesta en el inciso 3 del artículo 53.3, concurren y se cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:

c.1. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma.

c.2. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.

c.3. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.

d. En el caso que nos ocupa el Tribunal Constitucional, al analizar el cumplimiento de los requisitos citados, comprueba que el reclamo fundamental que hace la parte recurrente ha sido “invocado formalmente en el proceso”, tan pronto se tuvo conocimiento de las alegadas violaciones.

e. En relación con el requisito del literal b del artículo 53.3, en efecto, se comprueba que se agotaron todos los recursos jurisdiccionales disponibles y que la violación a derechos fundamentales que la parte recurrente invoca no fue subsanada.

f. En lo que se refiere al requisito consignado en el literal c del referido artículo, la argüida violación es imputable directamente al tribunal que dictó la Sentencia núm. 306 (Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia), conforme a los argumentos que sustentan el recurso.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

g. Luego de verificar la concurrencia de todos los requisitos de admisibilidad del recurso, respecto de la referida sentencia núm. 306, es necesario ponderar lo previsto en el párrafo del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el cual prescribe que

La revisión por la causa prevista en el numeral 3) de este artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado. El tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.

h. La referida noción, de naturaleza abierta e indeterminada, fue definida por este tribunal en su Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), estableciendo que ella

sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

i. En este caso, el Tribunal Constitucional considera que el presente recurso tiene especial trascendencia y relevancia constitucional porque plantea la necesidad de continuar desarrollando su jurisprudencia sobre la determinación del contenido



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

esencial del derecho al trabajo, al debido proceso judicial en cuanto al deber de motivación, así como a los alcances procesales de los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley.

10. Sobre el presente recurso de revisión constitucional

En relación con el recurso de revisión constitucional, este tribunal considera lo siguiente:

a. La parte recurrente, Mallid Giovanny Mustafá Marte y Eduardo Robinson López, solicita la nulidad de la Sentencia núm. 306, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014), sobre la base de que al rechazar su recurso de casación reiteró las mismas violaciones a los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley; su derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, al rendir una decisión carente de motivación y a su derecho al trabajo en cuanto a un salario justo y digno, faltas que alegadamente fueron cometidas por la Corte de Trabajo de Santiago al conocer de su caso y reiteradas por la corte de casación dominicana.

10.1. En cuanto a la alegada violación al principio de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley

b. La parte recurrente aduce que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia violó –al conocer de su caso– los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley instituidos en el artículo 110 de la Constitución dominicana.

c. La Ley núm. 187-07, del dieciocho (18) de julio de dos mil siete (2007), dispuso en su artículo 1, que las sumas recibidas y aceptadas por los trabajadores de empresas que anualmente liquidaban a su personal en el pago de sus prestaciones laborales hasta enero de dos mil cinco (2005), se considerarían como saldo definitivo y liberatorio y, por tanto, los contratos de trabajo de dichos



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

trabajadores se reputaban extinguidos hasta dicha fecha [enero de dos mil cinco (2005)], iniciándose a partir de ahí un nuevo contrato; por ende, si con posterioridad a dicha fecha el contrato finalizaba, en el cálculo de las prestaciones no se podía tomar en cuenta los años trabajados antes del 2005. En la especie, mediante contrato por tiempo indefinido los recurrentes laboraron de la manera siguiente: Mallid Giovanny Mustafá Marte, desde el siete (7) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) hasta el dieciséis (16) de abril de dos mil siete (2007), esto es durante siete (7) años, siete (7) meses y nueve (9) días; y Eduardo Robinson López, desde el treinta (30) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997) hasta el veintitrés (23) de abril de dos mil siete (2007), esto es durante nueve (9) años, nueve (9) meses y veinticuatro (24) días.

d. La parte recurrente considera que dicha legislación supone una aplicación retroactiva que atenta contra la seguridad jurídica respecto del régimen laboral anterior en el que se consideraba que la liquidación anual constituía un anticipo en el pago de las prestaciones que eventualmente corresponderían al trabajador, por lo que dicha liquidación no culminaba con el contrato de trabajo y, por tanto, el trabajador acumulaba más años para fines de su liquidación final al rescindirse su contrato de trabajo. La parte recurrente le enrostra a la Suprema Corte haber basado su fallo en la Ley núm. 187-07, sin considerar que este fallo violaba el principio de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley.

e. Se advierte, sin embargo, la circunstancia de que la Suprema Corte de Justicia declaró conforme con la Constitución la Ley núm. 187-07, mediante la Sentencia núm. 2, del trece (13) de agosto de dos mil ocho (2008) (B.J. 1173), considerando que dicha ley no violentaba los principios de seguridad jurídica ni de irretroactividad de la ley. En dicha decisión, señalaba la Suprema Corte de Justicia, actuando como jurisdicción constitucional:

Considerando, que, por demás, si bien la ley nueva no puede afectar derechos adquiridos, aunque sí las simples expectativas, tal como han sido



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ambos conceptos definidos, no es menos válido afirmar que la ley nueva puede en ocasiones, por motivos imperiosos de orden público o económico, como es el caso de la ley de que se trata, afectar no sólo las simples expectativas, sino hasta los derechos adquiridos, cuanto más que el auxilio de cesantía no constituye un derecho adquirido, sino una simple expectativa del trabajador, la cual sólo lo beneficia cuando el contrato de trabajo termina con responsabilidad para el empleador; que esos motivos imperiosos de orden público y económico fueron justamente ponderados por el legislador en el preámbulo de la ley, como se dice antes, cuando expresa, atendiendo al interés de ambas partes en el contrato de trabajo, “que se hace necesaria la adopción de medidas urgentes que garanticen la estabilidad laboral y la protección de las fuentes de empleo”, vale decir, del trabajador y del empleador, lo que es un indicador de que estamos en presencia de una disposición legislativa basada en el orden público económico, ante el cual cede el interés de los particulares y como tal de aplicación inmediata, lo que en modo alguno puede confundirse con una aplicación retroactiva.

f. El Tribunal Constitucional reconoció la condición de cosa juzgada de la declaratoria de constitucionalidad de la prealudida ley núm. 187-07, al declarar inadmisibles una acción directa de inconstitucionalidad, mediante su Sentencia TC/0308/14, del veintidós (22) de diciembre de dos mil catorce (2014), en los términos siguientes:

En el presente caso, el objeto de la acción en inconstitucionalidad es la Ley núm. 187-2007, del 6 de agosto de 2007. En este orden es pertinente destacar que la Suprema Corte de Justicia rechazó una acción directa de inconstitucionalidad, interpuesta contra la indicada ley, en el entendido de que la referida norma es conforme con la Constitución... al Tribunal Constitucional le está vedado revisar las sentencias dictadas por la



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Suprema Corte de Justicia que hayan adquirido la autoridad de la cosa juzgada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución.

g. Por tanto, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, al considerar en su Sentencia núm. 306, la constitucionalidad de la referida ley núm. 187-07, no incurrió en un desconocimiento del principio de seguridad jurídica, ni de irretroactividad de las leyes, pues dicha ley núm. 187-07 fue considerada conforme con nuestro régimen constitucional y no atentatoria precisamente con los principios cuya violación denuncia la parte recurrente, lo que no puede ser considerado como una falta susceptible de provocar la nulidad de la decisión rendida sobre la base de esa apreciación judicial. Tampoco se advierte que la hubiere aplicado retroactivamente, pues la decisión recurrida reconoce:

Considerando, que nuestra Suprema Corte de Justicia en funciones de Tribunal Constitucional, declaró acorde la Constitución la Ley 187-07, del pasivo laboral (sent. núm. 2, 13 de agosto de 2008, B. J. núm. 1173) y nos expresa en el punto objeto del recurso, “c) a que la referida Ley 187-07, presenta una nueva realidad estableciendo un límite, (primero de enero de 2005), a partir de cuándo se computarán las prestaciones laborales de los trabajadores que se encontraren en la situación reglamentada por la ley, lo que descarta la posibilidad de que después de esa fecha la liquidación anual libere al empleador de ese cómputo, al momento de la terminación definitiva del contrato de trabajo”.

10.2. En cuanto a la alegada violación a la tutela judicial efectiva y el debido proceso por falta de motivación

h. La parte recurrente alega que el tribunal *a-quo* desconoció su derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso al presuntamente no referirse a un alegato esbozado por esta.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

i. El Tribunal Constitucional conceptualizó en su Sentencia TC/0017/13, del veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013), respecto de la debida motivación como una de las garantías del debido proceso y, por ende, de la tutela judicial efectiva:

Este Tribunal Constitucional reconoce que la debida motivación de las decisiones es una de las garantías del derecho fundamental a un debido proceso y de la tutela judicial efectiva, consagrados en las disposiciones de los artículos 68 y 69 de la Constitución, e implica la existencia de una correlación entre el motivo invocado, la fundamentación y la propuesta de solución; es decir, no basta la mera enunciación genérica de los principios sin la exposición concreta y precisa de cómo se produce la valoración de los hechos, las pruebas y las normas previstas que se aplicarán.

j. Para verificar si la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia cumplió o no en su Sentencia núm. 306, con su obligación de rendir una debida motivación respecto del aspecto que denuncia la parte recurrente, es preciso que el Tribunal someta la decisión al “test de la debida motivación”, instituido en la Sentencia TC/0009/13, del once (11) de febrero de dos mil trece (2013), en la que se establecen los estándares o requisitos que debe reunir toda decisión jurisdiccional para considerarse debidamente motivada. Estos requisitos o estándares son:

1. *Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones.* En la Sentencia núm. 306, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia cumple con este requisito, pues sistemáticamente va respondiendo los medios de casación que invoca la parte recurrente.

2. *Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar.* Al tratarse de un recurso de casación en materia laboral, que impide a la Suprema Corte de Justicia hacer valoraciones de hecho y de apreciación de las pruebas, solo se limitó la corte



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

de casación a valorar la interpretación y aplicación de la Corte de Trabajo de la ley de trabajo aplicable al caso. En la Sentencia núm. 306, se ponderan jurídicamente los textos legales aplicables al caso y la interpretación de la Corte de Trabajo sobre los mismos y los hechos de la causa, con lo que se cumple con dicho requisito.

3. *Manifiestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada.* En la Sentencia núm. 306, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia señala que la Ley núm. 187-07 representaba una nueva realidad jurídica estableciendo un límite a la práctica de las liquidaciones anuales hasta enero de dos mil cinco (2005), y que su constitucionalidad fue establecida en la Sentencia núm. 2, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el trece (13) de agosto de dos mil ocho (2008). Como se observa, el tribunal *a-quo* manifestó consideraciones pertinentes que justifican y fundamentan el fallo finalmente rendido, con lo que cumple con este tercer requisito.

4. *Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción.* En la Sentencia núm. 306, no se hacen enunciaciones genéricas de principios, ni de los textos legales aplicables al caso, sino que, por el contrario, se ponderan los principios de seguridad jurídica, así como las disposiciones del Código de Trabajo, la Ley núm. 87-01, sobre Seguridad Social y la Ley núm. 187-07, sobre Liquidación Anual de Trabajadores, cumpliéndose de ese modo con el cuarto requisito.

5. *Asegurar que la fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional.* Al estar debidamente motivada y al actuar la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia en funciones de corte de casación, dentro de las facultades competenciales que le reconoce tanto la Ley núm. 3726, sobre Recurso



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

de Casación y 639 y siguientes del Código de Trabajo, se cumple con el quinto y último requisito del test.

k. Al verificarse que la Sentencia núm. 306 supera el “test de la debida motivación” instituido por el Tribunal en su Sentencia TC/0009/13, del once (11) de febrero de dos mil trece (2013), procede, desestimar el presente medio promovido por la parte recurrente.

10.3. En cuanto la alegada violación al derecho del trabajo, al no pagar un salario justo y digno

l. La parte recurrente señala que la Sentencia núm. 306, desconoce su derecho al trabajo.

m. La Constitución de la República, en su artículo 62.9, garantiza la protección del salario justo y digno, bajo los siguientes términos: “Todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y sus familias necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”. El salario justo y digno es conceptualizado por la jurisprudencia constitucional comparada como la protección que el Estado debe garantizar a todo trabajador para no percibir un salario inferior al mínimo establecido atendiendo a la naturaleza del sector laboral al que pertenezca, de modo que dicho salario conserve el poder adquisitivo que le permita vivir con dignidad al permitirle satisfacer sus necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. En efecto, la Corte Constitucional de Colombia señala al respecto

se impone de la interpretación constitucional a la luz de los tratados y convenios internacionales de protección al salario. Es así como los Convenios 95 y 99 de la Organización Internacional del Trabajo relativos a la protección del salario... refuerzan la conclusión según la cual el derecho a un salario justo presupone derecho a mantener el poder



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

adquisitivo del mismo... [Sentencia C-1064/01, dictada por la Corte Constitucional de Colombia el diez (10) de octubre de dos mil uno (2001)].

n. En la especie, la parte recurrente no alega, ni se advierte controversia alguna en ese sentido al revisar la decisión recurrida, que su salario fuera disminuido o que percibiera un salario inferior al mínimo legalmente establecido en función del sector laboral al cual pertenece la empresa donde esta prestaba sus servicios. Al no quedar demostrados ni evidenciados los méritos para admitir este medio, procede, rechazarlo.

o. Después de la ponderación pormenorizada de los medios invocados por la parte recurrente respecto de las alegadas violaciones a sus derechos fundamentales por parte de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, y al no advertirse falta o violación alguna imputable al órgano judicial que dictó la referida sentencia, procede rechazar en todas sus partes el presente recurso de revisión.

Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma de la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos disidentes de los magistrados Ana Isabel Bonilla Hernández y Justo Pedro Castellanos Khoury. Consta en acta el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional.

Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

DECIDE:



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Mallid Giovanni Mustafá Marte y Eduardo Robinson López contra la Sentencia núm. 306 dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014).

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el presente recurso de revisión y, en consecuencia, **CONFIRMAR** la referida sentencia, por los motivos expuestos.

TERCERO: DECLARAR los procedimientos del presente proceso libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte recurrente, Mallid Giovanni Mustafá Marte y Eduardo Robinson López, y a la parte recurrida, GM Knits, S.A.

QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Lino Vásquez Samuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA
ANA ISABEL BONILLA HERNÁNDEZ

En ejercicio de la facultad prevista en los artículos 186 de la Constitución



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

dominicana, y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

Con el debido respeto al criterio mayoritario expresado en la presente sentencia, y en virtud de los razonamientos que justifican la posición asumida en la deliberación de la misma, procedemos a emitir el presente voto disidente respecto a la decisión adoptada que declara el rechazo del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, (Expediente núm. TC-04-2014-0291, relativo a recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Mallid Giovanny Mustafá Marte y Eduardo Robinson López contra la Sentencia núm. 306, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014).

A continuación, expondremos las razones por las cuales nos apartamos de la presente decisión.

I. ANTECEDENTES

Esta sentencia trata del recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales interpuesto por los señores Mallid Giovanny Mustafá Marte y Eduardo Robinson López, a los fines de que se anulara la Sentencia núm. 306, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014).

1.1. La especie se origina cuando la empresa GM Knits, S.A., ejerce el desahucio contra los señores Mallid Giovanny Mustafá Marte y Eduardo Robinson López, luego de haberse mantenido laborando en dicha empresa. La referida empresa liquidaba periódicamente, en el mes de diciembre de cada año a sus empleados. A raíz del desahucio ejercido, los trabajadores interpusieron una demanda en reclamación de la parte completiva de sus prestaciones laborales y demás derechos



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

adquiridos, la cual fue desestimada en las instancias correspondientes del orden judicial.

1.2. Los trabajadores interpusieron un recurso de casación, el cual fue rechazado mediante la Sentencia núm. 306, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014).

II. FUNDAMENTOS DEL VOTO DISIDENTE

a. El seis (6) de agosto del dos mil siete (2007) fue promulgada la Ley núm. 187-07, relativa al pasivo laboral, que dispone que la suma recibida y aceptada cada año por los trabajadores hasta el primero (1) de enero de dos mil cinco (2005), por concepto del pago de prestaciones laborales, se considerará como saldo definitivo y liberatorio a favor del empleador.

b. En la Sesión de la Cámara de Diputados del dieciocho (18) de julio de dos mil siete (2007), en donde se aprobó dicha ley, quien suscribe, en su calidad de diputada de la República por la Provincia de Santiago, hizo constar en acta un voto NO, contrario a la aprobación de dicha ley, por considerar que la misma vulneraba el principio de irretroactividad de la ley, consignado en la Constitución dominicana, y que además transgredía los derechos de los trabajadores, ya que, en aras de preservar la estabilidad económica de las empresas de zona franca *se rompía la soga por lo más débil*, por lo que el Congreso Nacional, con la aprobación de la misma, incurría en una vulneración a la Constitución.

c. El trece (13) de agosto de dos mil ocho (2008), la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante la Sentencia núm. 2, decidió una acción directa de inconstitucionalidad en contra de la referida ley, interpuesta por la Federación Nacional de Trabajadores Textileros, Algodoneros, del Cuero y sus Afines (FENTRATACA), bajo el argumento de que la norma vulneraba los principios de irretroactividad (Artículo 47 de la Constitución) y de seguridad jurídica (artículo



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

75 del Código de Trabajo). Dicha corte declaró la norma conforme con la Constitución, apartándose de su propio criterio establecido mediante su sentencia del dieciséis (16) de marzo del año dos mil tres (2003), en la cual sostenía que los valores recibidos por el trabajador mediante la práctica de la liquidación anual “tienen un carácter de anticipo de las indemnizaciones laborales que solo pueden ser deducidos del pago que corresponda al trabajador que con posterioridad es objeto de un desahucio real”.

d. La Suprema Corte de Justicia consideró que la Ley núm. 187-07, no vulnera los principios de irretroactividad de la ley y de seguridad jurídica, criterio que la decisión del Tribunal Constitucional, que es objeto del presente voto, cita en su página 18.

e. El Tribunal Constitucional, mediante Sentencia TC/0308/14, del veintidós (22) de diciembre de dos mil catorce (2014), declaró inadmisibles una acción directa de inconstitucionalidad en contra de la mencionada ley núm. 187-07, por ser cosa juzgada, esto en virtud de las disposiciones del art. 277 de la Constitución del año dos mil diez (2010), que le impide revisar las decisiones que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas por la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio del control directo de la constitucionalidad, previo a la entrada en vigencia de esta constitución.

f. El Tribunal Constitucional solo podrá examinar la constitucionalidad de la referida ley, si en una nueva acción directa de inconstitucionalidad contra esta norma, se invocaren argumentos nuevos y distintos a los examinados por la Suprema Corte de Justicia, de conformidad al precedente establecido en su Sentencia TC/0339/14, del veintidós (22) de diciembre de dos mil catorce (2014), y confirmado en la Sentencia TC/0618/15, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince (2015), (Página 25, párrafo 2.2.4.):

De manera que, tal como plantea el referido precedente, si las



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

pretensiones de la accionante presentan elementos nuevos que no han sido ponderados por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional debe conocer la acción directa en inconstitucionalidad, a fin de establecer un criterio sobre tales consideraciones.

g. Nuestra disidencia con respecto a la presente decisión del Tribunal Constitucional, obedece a un sentido de coherencia, por haber fijado previamente posición como legisladora, sobre la inconstitucionalidad que vicia la Ley núm. 187-07, y haber disentido del fallo de la Suprema Corte de Justicia, en tanto consideramos que debió declararse no conforme con la Constitución la ley impugnada.

h. La Suprema Corte de Justicia, en la señalada Sentencia núm. 2, del trece (13) de agosto de dos mil ocho (2008), en una de sus motivaciones expresa:

Considerando, que, por demás, si bien la ley nueva no puede afectar derechos adquiridos, aunque sí las simples expectativas, tal como han sido ambos conceptos definidos, no es menos válido afirmar que la ley nueva puede en ocasiones, por motivos imperiosos de orden público o económico, como es el caso de la ley de que se trata, afectar no sólo las simples expectativas, sino hasta los derechos adquiridos, cuanto más que el auxilio de cesantía no constituye un derecho adquirido, sino una simple expectativa del trabajador, la cual sólo lo beneficia cuando el contrato de trabajo termina con responsabilidad para el empleador; que esos motivos imperiosos de orden público y económico fueron justamente ponderados por el legislador en el preámbulo de la ley, como se dice antes, cuando expresa, atendiendo al interés de ambas partes en el contrato de trabajo, “que se hace necesaria la adopción de medidas urgentes que garanticen la estabilidad laboral y la protección de las fuentes de empleo”, vale decir, del trabajador y del empleador, lo que es un indicador de que estamos en presencia de una disposición legislativa basada en el orden público



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

económico, ante el cual cede el interés de los particulares y como tal de aplicación inmediata, lo que en modo alguno puede confundirse con una aplicación retroactiva.

i. Consideramos que el Congreso, para justificar la ley, y la Suprema Corte de Justicia en la interpretación de la misma, se fundamentaron en que se trataba de una cuestión “*de orden público*”, que ameritaba ser asumida ante la crisis del sector empresarial de Zona Franca y la necesidad de preservar la generación de empleos que el mismo proporcionaba, lo que supuestamente beneficiaba a ambas partes, empresariado y trabajadores. A diferencia de este criterio, consideramos que más que un asunto de orden público, y de interés recíproco para las partes del contrato laboral, se trató de una cuestión económica, impulsada por el sector patronal, en detrimento del sector laboral, para evadir la responsabilidad de pagar el pasivo laboral correspondiente al completivo de las prestaciones avanzadas en la liquidación año por año. Una muestra de que el sector de los trabajadores entendió que la norma no le era favorable, es el hecho de haber impugnado en inconstitucionalidad dicha norma por ante la Suprema Corte de Justicia.

j. En nuestro criterio, la Suprema Corte de Justicia debió declarar la ley inconstitucional, y mantener el discernimiento expresado en su sentencia del dieciséis (16) de marzo de dos mil tres (2003), que es cónsono con los principios protectores del Código de Trabajo, sobre el carácter irrenunciable de los derechos laborales adquiridos, los cuales no pueden, en modo alguno, ser considerados como meras expectativas de derecho, ya que la propia ley reconoce el pasivo laboral como una deuda a cargo del empleador, y lo exime de responsabilidad, a partir de la promulgación de la misma, y con efecto retroactivo en relación a los contratos suscritos, anteriores al primero (1) de enero de dos mil cinco (2005), que por disposición de esa ley fueron declarados extinguidos, y por vía de consecuencia, las prestaciones anuales que habían sido pagadas fueron consideradas como saldos definitivos.

k. En conclusión, reconocemos que este voto disidente, tiene una característica



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

especial, pues se aparta de la decisión mayoritaria, sin dejar de reconocer que la misma está fundamentada en un sentido técnico-jurídico. De lo que se trata es que consideramos que la Ley núm. 187-07, adolece de una “*inconstitucionalidad de origen*”, y en consecuencia, al ser el soporte legal de los fallos emitidos por la Corte de Apelación, de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, deriva en decisiones, que a nuestro juicio, son injustas, y se apartan de la misión de la justicia constitucional que es propiciar y garantizar la defensa de los derechos fundamentales, tal y como se evidencia en el asunto concreto de la presente decisión, en donde los recurrentes fueron despojados, de manera retroactiva, de prestaciones laborales acumuladas durante siete (7) años, en el caso del señor Mallid Giovanni Mustafá Marte, y durante nueve (9) años, en el caso del señor Eduardo Robinson López, por considerarse los anticipos entregados como saldo definitivo y liberatorio en favor de la empresa recurrida, por efecto de la referida ley núm. 187-07.

Firmado: Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO
JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia, y coherentes con la opinión que mantuvimos en la deliberación, ejercemos la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución y, en tal sentido, presentamos nuestro voto particular, fundado en las razones que expondremos a continuación:

1. En la especie, el recurrente interpuso un recurso de revisión de decisión jurisdiccional contra la Sentencia núm. 306. dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014), alegando violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso por la falta de



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

motivación de las decisiones, los principios de irretroactividad de la ley y de seguridad jurídica, así como la afectación al derecho al trabajo.

2. El Tribunal Constitucional decidió admitir el recurso, al considerar que se verifican todos los requisitos de admisibilidad establecidos en la norma, y muy particularmente en el artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y Procedimientos Constitucionales; sin embargo, al conocer el fondo de la cuestión, determinó que “al no advertirse falta o violación alguna imputable al órgano judicial que dictó la referida sentencia, procede en tal virtud rechazar en todas sus partes el presente recurso de revisión”.

3. Discrepamos de la decisión de la mayoría, por dos razones: 1. por los argumentos utilizados para determinar la admisibilidad del recurso; y 2. porque consideramos que, en la especie, sí se verifica violación a derechos fundamentales.

I. SOBRE EL ARTÍCULO 53

4. El artículo 53 instaaura un nuevo recurso, el de revisión de decisión jurisdiccional y, al hacerlo, establece también, los requisitos para su admisión.

A. Sobre el contenido del artículo 53

5. Dicho texto reza:

El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los siguientes casos:



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza.

2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional.

3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma.

b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.

c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.

Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.

6. Conviene detenerse en la redacción de estos párrafos. Todos se refieren a situaciones cumplidas, concretadas. No se trata, pues, de que, por ejemplo, en la



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

causal segunda (53.2), el recurrente alegue que la decisión recurrida viola un precedente del Tribunal Constitucional, sino de que, efectivamente *“la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional”*. Ni de que, para poner otro ejemplo relativo a la causal tercera (53.3), el recurrente alegue la violación de un derecho fundamental, sino de que, efectivamente, *“se haya producido una violación de un derecho fundamental”*.

7. Según el texto, el punto de partida es que *“se haya producido una violación de un derecho fundamental”* (53.3) y, a continuación, en términos similares: *“Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado (...)”* (53.3.a); *“Que se hayan agotado todos los recursos disponibles (...) y que la violación no haya sido subsanada”* (53.3.b); y *“Que la violación al derecho fundamental sea imputable (...) con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo (...)”*¹ (53.3.c).

8. Resaltamos, en efecto, particularmente respecto del 53.3 y de sus literales, la coherencia de su redacción, o bien *“la lógica interna de la norma (...), la uniformidad y precisión en el uso del idioma”*². Reconocemos que el suyo no es el caso *“criticable”*³ de un texto que titubea *“entre el uso de uno y otro tiempo, combinando ambos en un mismo artículo sin ninguna razón aparente”*⁴, sino el de uno que tiene lo que todo texto normativo debe tener: *“una estructura lógica y coherente que lo identifique como tal y que, al mismo tiempo, facilite su inteligibilidad”*⁵. Vista su claridad, es, pues, posible y pertinente hacer una interpretación literal del mismo.

9. Es conveniente establecer que este recurso ha sido *“diseñado en base al modelo del amparo constitucional español, y que la LOTCPC ha copiado casi*

¹ En este documento, todas las negritas y los subrayados son nuestros.

² Guzmán Ariza, Fabio J. *El lenguaje de la Constitución dominicana*, Academia Dominicana de la Lengua- Gaceta Judicial; Editora Corripio, Santo Domingo, 2012, pp. 22- 23.

³ Guzmán Ariza, Fabio J., Op. cit., p. 77.

⁴ *Ibíd.*

⁵ Guzmán Ariza, Fabio J. Op. cit., p. 91.



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

*literalmente de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional español*⁶: nuestro artículo 53.3 procede del artículo 44 español⁷, mientras que el párrafo del artículo 53 procede del artículo 50 de la referida ley española⁸.

B. Sobre la naturaleza del recurso de revisión de decisión jurisdiccional, consagrado en el artículo 53

10. Como hemos visto, el artículo 53 inicia estableciendo que: *“El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución en los siguientes casos (...)”*.

11. Interesa detenernos en estas primeras líneas suyas, para derivar una primera cuestión: la facultad del Tribunal Constitucional para revisar decisiones es, de entrada, limitada, pues opera solamente en relación con aquellas que cumplan con tres requisitos, dos de carácter cualitativo –(i) que sea una decisión jurisdiccional; y (ii) que la decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada–, y otro de carácter temporal –(iii) que la decisión recurrida haya adquirido esta última calidad con posterioridad al 26 de enero del 2010–.

⁶ Jorge Prats, Eduardo. *Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales*. IUS NOVUM, Amigo del Hogar, 2011, p. 125. Dicha ley española fue modificada por la Ley No. 6/2007.

⁷ Dice el artículo 44 español: *“1. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes:*

“a) Que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial.

“b) Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional.

“c) Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello”. (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Concordancias, comentarios y jurisprudencia. Editora COLEX, España, segunda edición, 2008, p. 182)

⁸ Dice el artículo 50.1.b) español: *“Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”.* (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Concordancias, comentarios y jurisprudencia. Editora COLEX, España, segunda edición, 2008, pp. 277- 278).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

12. A pesar de que las disposiciones señaladas no parecen representar mayores dificultades en su aplicación, entendemos de suma importancia analizar el alcance de cada una, para determinar cuáles son los límites que el constituyente y el legislador han impuesto al Tribunal Constitucional con respecto a las decisiones que podrá revisar. Analizaremos únicamente los requisitos (ii) y (iii), relativos a la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, ya que para este caso en particular, por su obviedad, no es relevante el carácter de “*jurisdiccional*” de la decisión.

C. Un paréntesis necesario sobre la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, requerida para la admisión de los recursos de revisión de decisión jurisdiccional

13. En cuanto al segundo requisito, referido en el precedente numeral 11 –que la decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada–, Froilán Tavares explica de manera extensa cuándo una decisión adquiere la autoridad de la cosa juzgada y, asimismo, cuándo adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. En cuanto a la autoridad de cosa juzgada señala que “*mientras la sentencia sea susceptible de ser atacada por las vías ordinarias de recurso, oposición o apelación, su autoridad de cosa juzgada es puramente provisional, y que es suspendida si uno de esos recursos es ejercitado*”⁹.

14. Posteriormente precisa que “[c]uando estos recursos ordinarios han sido incoados infructuosamente, o cuando el plazo para interponerlos ha expirado, se dice que la sentencia ha “*pasado en autoridad de cosa juzgada*” o que ha “*adquirido la autoridad de la cosa juzgada*”. **Cuando no es susceptible de ser impugnada por una vía extraordinaria de recurso, revisión civil o casación, se dice que la sentencia es “irrevocable”**¹⁰.

⁹ Tavares, Froilán. *Elementos de derecho procesal civil dominicano*; volumen II, octava edición, p. 444.

¹⁰ *Ibíd.*



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

15. A forma de ejemplo señala que *“una sentencia contradictoria en primera instancia tiene inmediatamente autoridad de cosa juzgada, pasa en autoridad de cosa juzgada y llega al mismo tiempo a ser irrevocable si no es objeto de apelación en el plazo correspondiente”*¹¹. Asimismo dice que una sentencia *“llega a ser irrevocable cuando ya no puede ser impugnada por ninguna vía extraordinaria, o cuando éstas hayan sido ejercidas infructuosamente”*¹².

16. De igual forma pone el ejemplo de una sentencia dictada en única instancia en defecto y explica que *“una sentencia en defecto en única o última instancia, tiene de inmediato autoridad de cosa juzgada, pasa en fuerza de cosa juzgada cuando no es impugnada por oposición o cuando la oposición es desestimada, y vendrá a ser irrevocable cuando los recursos extraordinarios hayan sido desestimados”*¹³

17. Tomando en cuenta todo lo anterior, debemos concluir en que la calidad de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada adquirida por una sentencia, no implica necesariamente que esta haya sido dada por la Suprema Corte de Justicia. O bien, implica que una sentencia puede adquirir la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, aunque no haya sido emitida por la Suprema Corte de Justicia. De hecho, como se ha dicho, una sentencia dictada en primera instancia, si no es recurrida dentro de los plazos establecidos por la ley, adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; asimismo, si se interpone uno de los recursos extraordinarios que la ley disponga contra la misma y el recurso es desestimado, también la decisión adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

18. En este sentido, es fundamental subrayar, además, que el hecho de que una decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada no implica que se hayan agotado todos los recursos jurisdiccionales disponibles. En realidad, se trata de dos conceptos distintos y con implicaciones diferentes.

¹¹ Tavares, Froilán. Op. cit., p. 445.

¹² *Ibíd.*

¹³ Tavares, Froilán. Op. cit., p. 445.



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

19. En efecto, siempre conforme los términos de la Ley núm. 137-11, el requisito de que se hayan agotado todos los recursos disponibles en el sistema legal es uno muy particular que solo aplica para aquellos recursos de revisión que se interpongan en virtud de la causal tercera establecida en el artículo 53 de la Ley núm. 137-11 (artículo 53.3), es decir, en virtud de que se haya producido la violación de un derecho fundamental; y no aplica para las causales primera (artículo 53.1) ni segunda (artículo 53.2) de revisión de decisiones jurisdiccionales; por lo que de ninguna manera puede establecerse como un requisito de carácter general para todos los recursos de revisión de decisiones jurisdiccionales, como se hace en esta sentencia.

20. El tercer requisito, al que nos referimos también en el numeral 12 –que la decisión jurisdiccional haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de enero de 2010–, se encuentra contenido, como hemos visto, tanto en el artículo 277 de la Constitución como en la parte capital del artículo 53 de la Ley núm. 137-11.

21. De la lectura de dichos artículos debemos entender que el requisito consiste en que la decisión **haya adquirido** la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de enero del 2010. Dichos textos, en efecto, no establecen que la decisión debe haber sido **dictada** luego de la fecha indicada, sino que la condición de autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada debe haber sido **adquirida** con posterioridad a esta fecha. ¿Cuál es la importancia de esta precisión?

22. Efectivamente, tan pronto una decisión definitiva es dictada por la Suprema Corte de Justicia adquiere inmediatamente la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; por lo cual, en ese escenario el momento en que se dicta la sentencia y el momento en el que la misma adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, es exactamente el mismo. No obstante, y como explicamos previamente,



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

una decisión no adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada únicamente cuando es dictada por la Suprema Corte de Justicia, pues existen otros escenarios en los cuales una decisión puede adquirir dicha condición.

23. He ahí la importancia de identificar y distinguir estos dos conceptos, garantizando su correcta y justa aplicación. A forma de ejemplo, analicemos el caso de una decisión de apelación que haya sido dictada en diciembre de 2009, recurrida en casación en tiempo hábil y rechazado –este recurso– en el 2013. Si tomamos como referencia la fecha en que se dictó la decisión de apelación, entonces esta, que ya adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, no podría ser revisada por el Tribunal Constitucional, porque fue **dictada** antes de enero del 2010. Sin embargo, si nos suscribimos a la literalidad de los textos referidos y tomamos en cuenta el momento en que la decisión de apelación adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que fue cuando la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de casación, es decir, en el 2013, entonces vemos que se trata de una decisión de una Corte de Apelación que podría ser revisada por el Tribunal Constitucional, siempre que cumpla con los demás requisitos que veremos más adelante.

D. De vuelta con la naturaleza del recurso de revisión de decisión jurisdiccional

24. Continuando con el análisis de la parte capital del artículo 53, la parte inicial del texto plantea que el recurso será posible “*en los siguientes casos*”, expresión que es obviamente excluyente en el sentido de que tal posibilidad recursiva sólo será posible en los casos que ella señala.

25. Este recurso es extraordinario, en razón de que no procede para plantear cualquier cuestión, sino única y exclusivamente aquellas dispuestas de manera expresa por dicho texto.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

26. Este recurso es, además, subsidiario, en el caso particular de la causal tercera establecida en el artículo 53.3, la cual analizaremos posteriormente, en vista de que, como exige el artículo 53.3. a), el derecho fundamental vulnerado debe haberse incoado previamente en el proceso y, como plantea el 53.3.b), deben haberse agotado todos los recursos disponibles sin que la violación haya sido subsanada.

27. Y, sobre todo, este recurso “*es claramente un recurso excepcional”*¹⁴, porque en él no interesa “*ni debe interesar la disputa o conflicto que subyace al mismo, sino únicamente si en la resolución de dicho conflicto se han vulnerado o no derechos fundamentales. No es la administración de justicia lo que interesa, sino que no haya fallos en el procedimiento de administración de justicia en lo que a derechos fundamentales y libertades públicas se refiere”*¹⁵. Este recurso, en efecto, ha sido diseñado para ser interpuesto cuando “*falla la garantía de la protección de los derechos, para corregir los errores que se pueden cometer en el interior del sistema de protección de los derechos diseñado por el constituyente*”¹⁶.

28. Se trata de un recurso que, al tiempo de satisfacer determinadas necesidades del sistema de justicia –sobre todo las surgidas con la nueva estructura judicial e institucional prohijada por la Constitución de 2010, particularmente por la entrada a juego del Tribunal Constitucional y su rol como órgano de cierre del sistema de justicia–, garantiza su integridad y funcionalidad. Tal es la razón por la que, al tiempo de abrir esta posibilidad recursiva, la misma, conforme su naturaleza excepcional, queda sujeta a unas condiciones particularmente exigentes y rigurosas, excepcionales en el universo normativo de dicha ley.

E. Sobre el sentido del artículo 53 y la naturaleza de su contenido

¹⁴ Jorge Prats, Eduardo Op. Cit., p. 125.

¹⁵ Pérez Royo, Javier. *Curso de Derecho Constitucional*. En: Jorge Prats, Eduardo. Op. cit., pp. 126- 127.

¹⁶ Pérez Royo, Javier. *Curso de Derecho Constitucional*. En: Jorge Prats, Eduardo. Op. cit., p. 126.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

29. Así, el artículo 53 establece, aparte de los requisitos de admisibilidad enunciados previamente, las causales por las que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional puede ser admitido. Estas son independientes entre sí; constituyen llaves que abren por separado la posibilidad de que una decisión sea revisada. Son tres:

30. La primera (53.1) es: *“Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza”*.

31. La segunda (53.2) es: *“Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional”*.

32. En virtud de que al Tribunal todavía no se le han presentado recursos de revisión de decisión jurisdiccional en esos dos escenarios y de que la especie se refiere a la causal establecida en el artículo 53.3, focalizaremos nuestra atención en esta última, que es: *“Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental”*. Aquí, el requisito es que se haya producido la violación a un derecho fundamental. Así, antes de analizar si se cumplen con los supuestos a los que este numeral subordina la admisibilidad del recurso, es preciso verificar si, en efecto, se produjo una violación a un derecho fundamental.

33. Si se verifica que no se ha producido, no es necesario continuar analizando los requisitos siguientes y el Tribunal debe inadmitir el recurso. Como explicamos antes, no se trata de verificar que el recurrente *haya alegado la vulneración* de un derecho fundamental, sino de comprobar que, en efecto, se produjo la vulneración a un derecho fundamental. Tales son los términos del artículo 53, especialmente del 53.3; tal es, pues, el sentido que debe observar el Tribunal. Si el Tribunal se limitara a verificar que el recurrente haya alegado la violación de un derecho fundamental, el recurso sería admisible con mucha frecuencia, porque ésta es la alegación que usualmente formulan los recurrentes para acceder al recurso. Tal



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

situación contradiría gravemente el propósito y la naturaleza del recurso y convertiría a este recurso en uno ordinario.

34. Es discutible, ciertamente, que en fase de admisión se proceda a comprobar la vulneración del derecho. En este sentido, pensamos que, en todo caso, y especialmente cuando se requiera el estudio y la ponderación de multiplicidad de pruebas y documentos, el Tribunal tiene, siempre conforme los términos del artículo 53 respecto de la admisibilidad del recurso, la obligación de, por lo menos, verificar la existencia de alguna evidencia que apunte a que hubo una vulneración de un derecho fundamental o que dicha vulneración sea discutible. Lo que en ningún caso puede hacer el Tribunal es admitir un recurso por el simple hecho de que el recurrente “alega” que se le vulneró un derecho, porque, como indicamos previamente, esto haría que el recurso fuera admisible mucho más veces de lo que en realidad es necesario en la justicia constitucional, retrasando procesos en los que es necesario que el Tribunal se pronuncie para garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales vulnerados.

35. Si, por el contrario, el Tribunal comprueba que se produjo la violación a un derecho fundamental, tendrá, entonces, que proceder a verificar que **“concurran y se cumplan todos y cada uno”** –son los términos del 53.3– de los requisitos exigidos para esta causal; a saber:

36. *“a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma”*. En este sentido, el Tribunal tiene la obligación de verificar si el recurrente alegó la violación que hoy pretende subsanar en el momento en que tuvo conocimiento de la misma. Por tanto, tal y como indica la doctrina, no basta con que haya existido un proceso previo a la interposición del recurso, del que hayan conocido los tribunales ordinarios, sino que *“a estos se les ha tenido que dar la oportunidad efectiva de reparar la lesión de derechos denunciada, puesto que son*



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

los ‘*garantes naturales*’ de los derechos fundamentales”¹⁷. Si se comprueba que no se invocó, por mucho que se haya violado el derecho en cuestión, no se cumplirá este requisito y el Tribunal deberá inadmitir el recurso. Si, por el contrario, se verifica el cumplimiento de este requisito, el Tribunal deberá, entonces, pasar a comprobar el requisito siguiente.

37. “*b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada*”. El Tribunal Constitucional español ha establecido que esta exigencia tiene por objeto permitir que los órganos jurisdiccionales puedan examinar y, en su caso, corregir la lesión del derecho fundamental. Y, en este sentido, ha precisado que no se trata de agotar “*todos los recursos imaginables en un examen de todo el ordenamiento procesal, sino aquellos que pueden conducir a remediar la lesión (...)*”.¹⁸

38. Si se verifica que el recurrente no agotó los recursos disponibles, no se cumple este requisito, el recurso debe ser inadmitido y, como en el caso anterior, no es necesario continuar el análisis de los demás requisitos. Si, por el contrario, el Tribunal comprueba el cumplimiento de este requisito, debe continuar, entonces, con la verificación del siguiente. Como se aprecia, y ya habíamos adelantado, el agotamiento de los recursos disponibles no es un requisito general para todos los recursos de revisión que se interpongan por ante el Tribunal Constitucional, sino que es un requisito de admisibilidad para los recursos que se introducen por la causal tercera, establecida en el artículo 53.3, es decir, que “se haya producido la violación de un derecho fundamental”.

39. En relación con este artículo 53.3.b), es preciso verificar dos situaciones: (i) si los recursos que existen dentro del sistema legal han sido agotados por el recurrente; y (ii) si, aun agotados dichos recursos, la violación no ha sido subsanada.

¹⁷ Pérez Tremps, Pablo. *Los procesos constitucionales. La experiencia española*; PALESTRA, Perú, 2006, p. 125.

¹⁸ STC, 2 de diciembre de 1982.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

40. En este sentido, el requerimiento no se refiere a que la sentencia provenga como resultado del último recurso posible dentro del ordenamiento jurídico, sino que el recurrente haya agotado los recursos disponibles y que habiéndolos agotados, la violación persista. Por tanto, si, por ejemplo, la violación se produce por una actuación del tribunal de apelación, para que el recurso de revisión contra esa decisión sea admisible, el recurrente debe haber agotado previamente los demás recursos disponibles, en ese caso, el recurso de casación y que, además, la decisión de este último no haya subsanado la violación al derecho fundamental.

41. El tercer requisito que establece el artículo 53.3 es: *“Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar”*. Lo anterior significa *“que o bien en la sentencia recurrida en revisión se violó el derecho fundamental o bien en dicha sentencia no se corrigió la vulneración del derecho efectuada en otras instancias”*¹⁹. En otras palabras, este requisito se refiere a que el órgano que dictó la decisión recurrida sea el responsable de que se haya producido la violación, bien sea porque no la subsanó cuando se le presentó, o porque haya producido la vulneración directamente. Si el Tribunal comprueba que la violación no es imputable en los términos de la ley, el requisito no se cumple, el recurso debe ser inadmitido y, como en los casos anteriores, no es necesario continuar con la comprobación del requisito siguiente. Si, por el contrario, se verifica el cumplimiento de este requisito, esto, sin embargo, todavía no será suficiente para admitir el recurso y debe determinar, entonces, lo que ordena el párrafo del artículo 53.

42. El párrafo dice: *“La revisión por la causa prevista en el numeral 3) de este artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando este considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el*

¹⁹ Jorge Prats, Eduardo. Op. Cit., p. 128.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado. El tribunal siempre deberá motivar sus decisiones”. Este requisito “*confiere una gran discrecionalidad al Tribunal Constitucional a la hora de admitir la revisión*”²⁰, si bien ella no puede asimilarse a la arbitrariedad.

43. En este sentido, la expresión “*sólo será admisible*”, lejos de establecer que tal es el único requisito de admisibilidad contenido en el artículo 53, confirma, por el contrario, que los requisitos que el mismo contiene se refieren a la admisión del recurso. El sentido de la expresión es que, aun satisfechos todos los anteriores requisitos de admisibilidad, el recurso “*sólo será admisible*” si se reúne, también, este último, el de la especial trascendencia o relevancia constitucional. O bien, que los anteriores requisitos de admisibilidad no son suficientes sin este último.

44. En efecto, no nos parece razonable pensar que la admisibilidad del recurso, a la que la Ley consagra un artículo completo —el 53—, y una actuación particular —prevista en el 54, como veremos más adelante—, esté referida únicamente, como han planteado algunos, a lo que establece el párrafo del artículo 53. Recordemos, en este sentido, que esta exigencia es la misma que la Ley hace en el artículo 100 para el recurso de revisión constitucional de amparo, en cuyo caso, sin embargo, no consagra un procedimiento particular para su admisibilidad, como sí hace respecto de este recurso, para el cual exige la comprobación de todos los requisitos establecidos en el 53.3, incluida, por supuesto, la especial trascendencia o relevancia constitucional.

45. El significado del párrafo del artículo 53 no pudo ser mejor explicado por el académico y ex Magistrado del Tribunal Constitucional español, Manuel Aragón Reyes: “*La vulneración de derechos ya no será suficiente, por sí sola, para otorgar (y antes, admitir) el amparo, sino sólo y exclusivamente si el caso posee esa 'especial trascendencia constitucional', cuya justificación 'expresa' (así debe interpretarse) es carga que, en la demanda, ha de soportar el recurrente (nuevo*

²⁰ Jorge Prats, Eduardo. Op. Cit., p. 129.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

*art. 49.1 LOTC), que habrá de entender, a partir de ahora, que no le bastará con justificar que la vulneración de derechos se ha producido, sino que su amparo sólo será admitido si justifica suficientemente en la demanda la especial trascendencia constitucional del asunto y así es apreciada por el Tribunal Constitucional*²¹. De manera que si, finalmente, el Tribunal aprecia que se ha producido la violación a un derecho fundamental y que se cumplen cada uno de los requisitos del artículo 53.3, incluido su párrafo, procederá, entonces –y sólo entonces, vale subrayar–, a admitir el recurso y, consecuentemente, a pronunciarse sobre el fondo, en cuyo caso deberá acogerlo o rechazarlo. Si el recurso es acogido, el Tribunal revocará la sentencia recurrida; identificará los derechos vulnerados, su violación y establecerá su criterio al respecto; y, conforme los artículos 54.9 y 54.10 de la Ley núm. 137-11, remitirá el asunto al tribunal que dictó la sentencia anulada para que conozca “nuevamente del caso, con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en relación del derecho fundamental violado”. Si el recurso es rechazado, el Tribunal confirmará la sentencia recurrida.

46. En fin que en el orden previsto por el texto legal, siguiendo la lógica de su estructura, el Tribunal determina, primero, a cuál de los tres escenarios lo conduce el contenido del recurso. Colocado en el tercer escenario (53.3), procede entonces a verificar los requisitos cuyo cumplimiento se exige para entrar a este y, una vez en él, tomar las decisiones que correspondan.

47. No nos parece correcto operar en otro sentido. Determinar, por ejemplo, que se cumple lo dispuesto en el párrafo, respecto de la especial trascendencia y relevancia constitucional, sin antes haber establecido que se cumple “*la causa prevista en el numeral 3)*” –que “*se haya producido una violación de un derecho fundamental*”– a la que está referido y subordinado dicho párrafo.

²¹ Aragón Reyes, Manuel. *La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional*; Revista Española de Derecho Constitucional, número 85, enero- abril 2009, p. 35. En la más reciente modificación a esta ley, en 2007, se estableció la obligación, a cargo del recurrente, de justificar expresamente la especial trascendencia y relevancia constitucional del asunto planteado.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

48. Tampoco nos parece correcto verificar que se cumplen los literales a), b) y c) del numeral 3) sin que antes se compruebe el cumplimiento de lo que establece dicho numeral, es decir, que “*se haya producido la violación de un derecho fundamental*”.

49. Operar de esa manera no sólo contradice la lógica interna del texto legal sino que, además, por lo inútil, carece de sentido. En efecto, ¿qué sentido tiene comprobar la invocación previa, el agotamiento de los recursos disponibles y la imputabilidad al órgano si no comprueba antes que es cierto el objeto de la invocación, de los recursos y de la imputabilidad, es decir, que es veraz la violación reclamada?

50. Aparte el sentido que ha dado al artículo 53 –del que discrepamos en estas líneas–, la mayoría ha hecho dos reparos fundamentales a nuestra posición: uno, que los referidos requisitos no son de admisibilidad; y otro, que el Tribunal no puede verificar que se haya producido la violación de un derecho fundamentales – conforme lo establece el 53.3–, por lo que es necesario subvertir la lógica del texto y verificar, entonces, sus requisitos [53.3.a), 53.3.b), 53.3c) y párrafo] antes que la causal a la que estos se subordinan. Ambos los veremos a continuación.

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN DE DECISIÓN JURISDICCIONAL

51. Como hemos explicado, el artículo 53 consagra “*los presupuestos de admisibilidad*”²² del recurso.

52. La admisibilidad de un recurso o de una acción está directamente relacionada con el cumplimiento de los requisitos que ha establecido el legislador para interponerlos.

²² Jorge Prats, Eduardo. Op. Cit., p. 122.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

53. Conforme ha establecido el Tribunal Constitucional de Venezuela, la “*admisibilidad de la pretensión*”, se encuentra referida al cumplimiento de los requisitos legales (generalmente de orden público) que permitan su tramitación. Por interpretación en contrario, la *inadmisibilidad de la pretensión* se produce por la insatisfacción de esas exigencias que impiden la continuación del proceso, cuya implicación directa en el orden procesal lo estatuye como de orden público, lo cual impide que se declare la inadmisibilidad de la acción bajo un supuesto ajeno al establecido expresamente en la ley y esta declaratoria de inadmisibilidad no difiere (como en el caso de la admisibilidad), el análisis del fondo de lo pretendido, sino que lo impide.²³

54. En todo caso, la admisibilidad es asunto fundamental. Más, en la jurisdicción de un Tribunal Constitucional, usualmente el órgano de cierre del sistema de justicia. Poco importa, en efecto, que los resultados concretos para quien interpone el recurso, sean prácticamente los mismos si el Tribunal lo inadmite, que si lo admite y lo rechaza. Es mucho más lo que está en juego: es el mandato de la ley, lo que en ningún caso es algo menor; es la funcionalidad del recurso mismo, el objeto para el que fue diseñado, el rol que tiene asignado; es la integridad de la jurisdicción en la que está previsto que opere dicho recurso; y es, con todo, la lógica de funcionamiento de todo el sistema.

55. Aunque con frecuencia no se reconozca, los usuarios del sistema de justicia – nos referimos específicamente a los abogados–, tienen la responsabilidad de contribuir, con sus actuaciones, a su mejor funcionamiento. Es claro, sin embargo, que en ningún caso pararán mientes para crear situaciones donde en realidad no las hay y acceder a cualquier jurisdicción a promover ante ellas cualquier tipo de recursos en defensa de sus particulares intereses.

56. Ante esta realidad –universal, no sólo dominicana–, los tribunales tienen la responsabilidad de evitar que tales actuaciones, ejercidas con absoluta libertad,

²³ Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Venezuela. Exp.- 03-1886.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

puedan distorsionar el sistema o afectar su funcionamiento. La del Tribunal Constitucional es aún mayor.

57. Sobre la admisibilidad de este tipo de recursos, el Tribunal Constitucional de Perú ha explicado que *“el proceso de amparo en general y el amparo contra resoluciones judiciales en particular no pueden constituirse en mecanismos de articulación procesal de las partes, mediante los cuales se pretenda extender el debate de las cuestiones sustantivas y procesales ocurridas en un proceso anterior, sea éste de la naturaleza que fuere y que haya sido resuelto por los órganos jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un medio impugnatorio que continúe revisando una decisión que sea de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria, facultad que constituye la materialización de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional que la Constitución Política reconoce a este Poder del Estado; a menos que pueda constatarse un proceder manifiestamente irrazonable, que no es el caso. **Que el amparo contra resoluciones judiciales requiere como presupuestos procesales indispensables la constatación de un agravio manifiesto a los derechos fundamentales** de las personas que comprometa seriamente su contenido constitucionalmente protegido (RTC N° 02363-2009-PA/TC); presupuesto básico sin el cual la demanda resulta improcedente.”*²⁴

58. En la raíz de todo esto se encuentra, también, la naturaleza del propio Tribunal Constitucional. Como ha señalado la doctrina, el Tribunal Constitucional no es una *“super casación”* de las resoluciones de los tribunales ordinarios, porque no es misión suya revisar la concepción jurídica causal de los fallos de los tribunales o examinar si se adecuan al derecho ordinario objetivo, formal o material; si bien corresponde al Tribunal Constitucional obligar a todos los poderes públicos a la más estricta observancia de los preceptos constitucionales y, en tal

²⁴ Tribunal Constitucional de Perú. RTC No. 03333-2011-PA/TC



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

virtud, revisar la aplicación o interpretación que los tribunales ordinarios han realizado de tales normas fundamentales.²⁵

59. En efecto, *“el Tribunal Constitucional no puede convertirse en juez supremo de cualquier asunto, tanto por razones prácticas como institucionales. (...) El Tribunal Constitucional, aunque resulte difícil delimitar su ámbito material de actuación allí donde existe un recurso como el recurso de amparo, debe limitar su campo de actuación evitando la tentación de convertirse en un tribunal de justicia más, que revisa las decisiones de los demás órganos, centrándose sólo en aquellas cuestiones que posean mayor relevancia e interés constitucional y evitando innecesarias tensiones institucionales”*²⁶.

60. En todo esto va, además, la *“seguridad jurídica”* que supone la *“autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada”* de una decisión para las partes envueltas en un proceso, de modo que, terminado un caso conforme las posibilidades que provee la legislación, éste no pueda ser revisado sino en casos muy excepcionales.

61. En este sentido, el recurso de revisión de decisión jurisdiccional modula el principio de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida en que permite al Tribunal Constitucional modificar una decisión que tenga este atributo, a los fines de cumplir con su función de salvaguardar los derechos fundamentales que sean violados en el marco de un proceso jurisdiccional ordinario. Pero, eso sólo puede ocurrir, como hemos visto, en los muy específicos y excepcionales casos señalados. Esta es, en efecto, una posibilidad que no puede estar –y no está– abierta para todos los casos, sino sólo para aquellos que, superados los rigurosos filtros que la ley impone, puedan acceder a este recurso, ser admitidos por el Tribunal Constitucional y, consecuentemente, ser conocidos y decididos por éste.

²⁵ Martínez Pardo, Vicente José. *El recurso de amparo constitucional: consideraciones generales*. [En línea] Disponible en: www.enj.org. Consultado el 15 de mayo de 2013.

²⁶ Pérez Tremps, Pablo. *Los procesos constitucionales. La experiencia española*; PALESTRA, Perú, 2006, pp. 155- 156.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

62. Es lo que ocurre con el recurso de revisión de decisión jurisdiccional, cuyas condiciones de admisibilidad son establecidas por el artículo 53 y, por cierto, confirmadas por el artículo 54 de la misma ley.

A. Sobre el artículo 54 de la Ley núm. 137-11

63. El artículo 54 establece el procedimiento que rige el recurso de revisión de decisión jurisdiccional, que incluye aspectos de admisibilidad que el Tribunal tiene que evaluar y respecto de ellos decidir.

64. El texto establece, incluso, una fase primera para la admisión y una posterior para la decisión del recurso, conforme los términos:

64.1 Del artículo 54.5, que reza: *"El Tribunal Constitucional tendrá un plazo no mayor de treinta días, a partir de la fecha de la recepción del expediente, para decidir sobre la admisibilidad del recurso. En caso de que decida admitirlo deberá motivar su decisión."*

64.2. Del artículo 54.6, que establece que la admisibilidad será decidida *"en Cámara de Consejo, sin necesidad de celebrar audiencia"*. Y

64.3. Del artículo 54.7, que dice: *"La sentencia de revisión será dictada por el Tribunal Constitucional en un plazo no mayor de noventa días contados a partir de la fecha de la decisión sobre la admisibilidad del recurso."*

65. En relación con la segunda fase, conviene retener lo que establecen:

65.1. El artículo 54.8, que expresa: *"La decisión del Tribunal Constitucional que acogiere el recurso, anulará la sentencia objeto del mismo y devolverá el expediente a la secretaría del tribunal que la dictó."* Y



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

65.2. El artículo 54.10, que dice: *"El tribunal de envío conocerá nuevamente del caso, con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en relación del derecho fundamental violado o a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma cuestionada por la vía difusa."*

66. Sin embargo, el Tribunal decidió tomar ambas en una sola sentencia, en cuya estructura atiende y resuelve, primero, la admisibilidad del recurso y, luego, el fondo del mismo. Tal fue el contenido de su decisión en la sentencia TC/0038/12 del trece de septiembre de dos mil doce. En esta, el Tribunal reconoció que *"debe emitir dos decisiones, una para decidir sobre la admisibilidad o no del recurso, y la otra, en el caso de que sea admisible, para decidir sobre el fondo de la revisión constitucional de la sentencia";* y, en aplicación de los principios de celeridad, de economía procesal y de efectividad, resolvió decidir *"la admisibilidad y el fondo del recurso mediante una sola decisión"*.

67. Precisamente, el hecho de que el legislador haya contemplado la necesidad de dos sentencias, una de admisibilidad y otra de fondo, evidencia la importancia de la fase de admisibilidad y, consecuentemente, la necesidad de que el Tribunal pondere y analice a fondo los requisitos o filtros creados por el legislador para admitir dicho recurso.

68. Así, conviene destacar que la salida del recurso –una decisión *"en relación del derecho fundamental violado"* (54.10)– es coherente con la entrada al mismo – que *"se haya producido una violación de un derecho fundamental"* (53.3)–. Verificada esta última para la admisión del recurso, como planteamos, su decisión conduce a la única solución posible, la fijación del criterio del Tribunal con respecto a la vulneración previamente identificada, en la que deberá establecer los lineamientos a ser seguidos por el tribunal del cual emanó la decisión inicialmente, para emitir su nueva decisión, conforme los artículos 54.9 y 54.10 ,así como todos



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

los demás tribunales del país, para la interpretación, aplicación y protección del derecho en cuestión.

B. Sobre el tratamiento dado por el Tribunal Constitucional dominicano al artículo 53

69. Conviene, por supuesto, revisar el tratamiento que ha dado el Tribunal Constitucional dominicano a este recurso.

70. Se puede apreciar que la posición que sustentamos en este voto no es nueva para el Tribunal, por cuanto éste la había tomado, no en una sino en varias ocasiones. En efecto:

70.1: En su sentencia TC/0057/12 declaró inadmisibile el recurso, fundado en que no se cumplía con el requisito c) del 53.3, toda vez que **“la aplicación, en la especie, de la norma precedentemente descrita ha sido apegada a lo dispuesto por el legislador y, en consecuencia, no es imputable a la Suprema Corte de Justicia la comisión de una acción o una omisión cuya consecuencia haya sido la violación de un derecho fundamental”**.

70.2: Asimismo, en su sentencia TC/0064/12 declaró inadmisibile el recurso, en virtud de que “el pedimento **no es un fundamento que tenga la trascendencia y la relevancia** constitucional suficientes, **al no constituir violación a algún derecho tutelado por este tribunal**”. Es decir, no hay violación a derecho fundamental ni, consecuentemente, relevancia o trascendencia constitucional, por lo que se inadmite el recurso.

70.3: De igual manera, en su sentencia TC/0065/12, declaró inadmisibile el recurso debido a que **“en la especie ha quedado comprobado la no vulneración del derecho de propiedad alegado por las recurrentes, y al no existir**



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

la conculcación al derecho fundamental invocado, el presente recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales deviene en inadmisibles”.

70.4: También, el Tribunal en su sentencia TC/0001/13 declaró inadmisibles el recurso porque dicho caso no tenía “*especial trascendencia o relevancia constitucional, en razón de que el tribunal que dictó la sentencia recurrida se limitó a declarar la perención de un recurso de casación (...)*”, y por tanto “no se suscitó ninguna discusión relacionada a la protección de los derechos fundamentales”. Y

70.5: Igualmente, en su sentencia TC/0069/13, declaró inadmisibles el recurso, fundado en que en ese caso “no existe la posibilidad de vulnerar derechos fundamentales, y por tanto el recurso (...) no cumple con los supuestos de las decisiones jurisdiccionales a las que se contrae el artículo 53” .

70.6: Más recientemente, en su sentencia TC/0121/13 estableció que “al no constituir la omisión de estatuir un error puramente material, no se verifica violación alguna a los derechos fundamentales de los recurrentes (...). En consecuencia, la interposición por parte de los recurrentes de la revisión constitucional en la especie no cumple con la normativa prevista en el citado artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, por lo que procede inadmitir el recurso que nos ocupa”.

71. Hay que decir, sin embargo, que junto a lo anterior, el Tribunal ha dado un tratamiento diferente a la admisibilidad del recurso en muchos otros casos, por lo hay que reconocer que, si a precedentes vamos, el Tribunal los tiene en ambos sentidos.

72. Conviene retener, en todo caso, que muchos de los recursos que el Tribunal ha admitido, han sido rechazados por no cumplir con lo que el 53.3 establece, es decir, que “se haya producido la violación de un derecho fundamental”.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

III. EL QUID DE LA PROHIBICIÓN DE REVISAR LOS HECHOS EN LOS RECURSOS DE REVISION DE DECISION JURISDICCIONAL

73. Como avanzamos, una de las razones que ha guiado a la mayoría en esta decisión se desprende de la prohibición de revisar los hechos, consagrada en el artículo 53.3.c). Nos parece, sin embargo, que esta no es bien entendida.

74. Se ha dicho, en efecto, que el Tribunal no puede verificar la violación de un derecho fundamental, como exige el 53.3, porque no puede revisar los hechos, como consagra el 53.3.c).

75. Resulta interesante, por cierto, notar que este planteamiento no cuestiona la pertinencia de comprobar, a la entrada del recurso, que “*se haya producido una violación de un derecho fundamental*”, sino que se resigna ante la supuesta imposibilidad de hacerlo.

76. Resulta igualmente interesante –y hasta curioso– apreciar que, sin que se aporte alguna explicación razonable, tal imposibilidad no se considere para verificar, también a la entrada del recurso, la invocación previa de la vulneración reclamada, ni para comprobar el agotamiento previo de todos los recursos disponibles sin que la violación haya sido subsanada, ni para establecer la imputabilidad inmediata y directa al órgano jurisdiccional del que proviene la decisión recurrida.

77. En relación con esto último, sin embargo, precisamos que, por ejemplo, la comprobación de que el derecho de defensa, cuya vulneración usualmente sirve de base a este recurso, no se ha producido en vista de que la recurrente participó en el proceso y defendió sus intereses, en nada se diferencia de la comprobación de que el derecho vulnerado se invocó previamente en el proceso ni de la comprobación de los otros dos requisitos del 53.3. Cada una de estas actuaciones se relaciona de



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

la misma forma con los hechos. Ninguna de aquellas implica la revisión de estos. Y lo mismo, pues, debería considerarse a la hora de comprobar que “*se haya producido una violación de un derecho fundamental*”

78. En todo caso, como ya avanzamos y demostraremos en estas líneas, esa imposibilidad no es tal, es una imposibilidad mal entendida.

79. Por supuesto que el Tribunal no puede revisar los hechos contenidos en el recurso. Pero no es eso lo que está en juego aquí. Lo que está en juego, como en otros aspectos de este artículo 53, es lo que se aprehende de esa norma, en este caso lo que se entiende por revisar los hechos.

80. La imposibilidad de revisar los hechos es coherente con la naturaleza del recurso. Se trata de un recurso excepcional y, en tal virtud, no es “*un recurso universal de casación*”²⁷ ni, como ha dicho el Tribunal Constitucional español, “*una tercera instancia*”²⁸ ni “*una instancia judicial revisora*”²⁹. Este recurso, en efecto, “*no ha sido instituido para asegurar la adecuación de las resoluciones judiciales a la realidad de los hechos o a la idea que acerca de estos tengan las partes*”³⁰. Hacerlo sería anacrónico pues conllevaría que “*los ámbitos constitucionalmente reservados al Poder Judicial, de una parte, y al TC, de la otra, quedarían difuminados*”³¹.

81. En este sentido, el Tribunal Constitucional español ha rechazado la “*constante pretensión*”³² de que mediante este recurso se revisen íntegramente los procesos “*penetrando en el examen, resultado y valoración de las pruebas practicadas y justeza o error del derecho aplicado y de las conclusiones*

²⁷ Fernández Farreres, Germán. *El Recurso de Amparo según la Jurisprudencia Constitucional*; Marcial Pons, Madrid, 1994, p. 35.

²⁸ *Ley Orgánica del Tribunal Constitucional*. Editora COLEX, segunda edición, 2008, España, p. 221.

²⁹ *Ibíd.*

³⁰ *Ley Orgánica del Tribunal Constitucional*. Op. cit., p. 231.

³¹ Fernández Farreres, Germán. Op. Cit., p. 310.

³² STC 105/83, 23 de noviembre de 1983. En: Portero Molina, José Antonio. *Constitución y jurisprudencia constitucional*; séptima edición corregida y aumentada con jurisprudencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 477.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

alcanzadas en las sentencias allí dictadas, erigiendo esta vía del amparo constitucional en una auténtica superinstancia, si no en una nueva casación o revisión.”³³

82. Así, ha reiterado la alta corte española que, en realidad, *“en esta clase de recursos la función del T.C. se limitará a concretar si se han violado o no los derechos o libertades del demandante, preservándolos o restableciéndolos, más absteniéndose de cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales (...), porque (...) en el amparo constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de las cuales se formuló el recurso.”*³⁴

83. Ha reiterado, asimismo: *“La justicia constitucional de amparo no es, en modo alguno, una instancia de revisión y por ello no es la actuación global de un determinado órgano judicial en un determinado proceso objetivada en una Sentencia también determinada lo que constituye el objeto del proceso de amparo constitucional, sino tan solo aquellas violaciones de derechos y libertades que tengan ‘su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano jurisdiccional’ (art. 44.1 de la LOTC). Es más: tales posibles violaciones han de ser enjuiciadas ‘con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional’ ”*³⁵ .

84. Como se aprecia, el sentido de la expresión *“con independencia de los hechos”* es que, separadamente de los hechos que explican el proceso, el Tribunal se limitará a verificar que se ha producido la violación de un derecho fundamental y que ella es imputable al órgano judicial del que proviene la sentencia recurrida, sea porque la generó o sea porque no la subsanó. Así, *“con independencia de los*

³³ *Ibíd.*

³⁴ *Ibíd.*

³⁵ ATC 110/81. En: Fernández Farreres, Germán. Op. Cit., p. 312. Precisa este autor: *“El ATC 110/81, f.j.1, entre los primeros pronunciamientos sobre esta cuestión (con posterioridad, entre otros muchos, AATC 119/83, 359/83, 595/83, 20/84, 178/85, etc.)...”* .



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

hechos”, de ninguna manera significa que el Tribunal ha de operar de espaldas a los hechos, sino que, de frente a ellos, focaliza su actuación en lo relativo a la vulneración de derechos fundamentales que se le presenta en el recurso.

85. El quid de la prohibición de revisar los hechos está en que el Tribunal, en el marco del recurso, tiene que asumir –y asume– como veraces y válidos “*los hechos inequívocamente declarados*”³⁶ en las sentencias recurridas mediante el recurso. El Tribunal tiene que partir –y parte– de unos hechos que le son dados y que no puede revisar, no puede modificar.

86. En este sentido, el órgano de cierre de la justicia española ha subrayado que no es atribución suya la de “*revisar los hechos declarados probados y el derecho aplicado en la resolución judicial impugnada*”³⁷, sino que, por el contrario, está obligado a “*partir de los hechos que dieron lugar al proceso declarados probados por las Sentencias impugnadas (...)*”³⁸.

87. Como ha dicho Pérez Tremps, “*el recurso de amparo es un recurso donde no se debate sobre elementos fácticos sino sólo sobre cuestiones jurídicas, por más que estas se proyecten siempre sobre hechos. Por tanto, casi en la totalidad de las ocasiones, todo el sustrato fáctico del recurso de amparo viene predeterminado en la vía judicial previa, sin que pueda revisarse en amparo (...), de forma que, constando en las actuaciones, no procederá realizar prueba alguna*”³⁹.

88. Y en otra parte, aún más claramente, ha dicho el destacado jurista español: “*en los recursos de amparo contra actos y decisiones judiciales (...), el Tribunal Constitucional ejerce un control de tipo casacional puesto que no hay identidad de*

³⁶ Fernández Farreres, Germán. Op. Cit., p. 184.

³⁷ Fernández Farreres, Germán. Op. Cit., p. 183.

³⁸ STC 2/82. En: Fernández Farreres, Germán. Op. Cit., p. 159.

³⁹ Pérez Tremps, Pablo. *El recurso de amparo*; Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 285.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

objeto entre el proceso judicial y el recurso de amparo, sino sólo una revisión de aquel en lo que atañe al respecto a los derechos fundamentales”⁴⁰ .

89. Sin embargo, la prohibición de revisar los hechos no puede implicar –y no implica– vendar los ojos del Tribunal a la hora de resolver el recurso. Tal no es, ni puede ser, el sentido de la norma. Si así fuera, el Tribunal tendría, entonces, que renunciar a las comprobaciones que manda el artículo 53.3, y resignar, por tanto, el cumplimiento de este requisito. El Tribunal quedaría en la anacrónica situación de no poder cumplir lo que la ley le exige y no poder ejercer *“el control constitucional de las resoluciones impugnadas en sede de garantía de los derechos fundamentales”*⁴¹ .

90. En relación con esto, es ineludible retener que, como también ha dicho el Tribunal Constitucional español, *“la prohibición de ‘conocer’ de los hechos concierne a la acepción técnico– procesal de este vocablo que alude a la atribución de competencia. No se trata de prohibición de conocimiento en el sentido de ilustración o análisis reflexivo de los antecedentes que puede resultar positivo e incluso necesario para fundar la resolución”*⁴² ; precisión que ha sido reiterada en STC 62/82 y STC 47/85 y en otras decisiones y que *“resulta capital, por cuanto supone que el TC no puede revisar los hechos de los que ha conocido el órgano judicial tal como los mismos han quedado fijados definitivamente en el correspondiente proceso. Es decir, como se ha señalado en diferentes ocasiones (SSTC 54/84, 38/85, etc.), la eficacia del recurso de amparo se hace depender de la base o apoyo que supone el respeto a los hechos que se hayan declarado probados por los Tribunales ordinarios (...)”*⁴³ .

91. Al respecto, Pérez Tremps es claro nuevamente, cuando afirma que *“una cosa es que el Tribunal Constitucional deba abstenerse de volver a determinar los*

⁴⁰ Pérez Tremps, Pablo. *El recurso de amparo*. Op. cit., p. 300.

⁴¹ STC 143/91. En: Fernández Ferreres, Germán. Op. Cit., p. 184.

⁴² STC 46/82. En: Fernández Ferreres, Germán. Op. Cit., p. 183

⁴³ STC 46/82. En: Fernández Ferreres, Germán. Op. Cit., p. 183.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

aspectos fácticos, ya fijados por los Tribunales ordinarios, o de revisar esa fijación, y otra es que esos aspectos fácticos no sean relevantes en el recurso de amparo para concluir si ha existido o no lesión de derechos, pudiéndose, pues, valorar desde esta estricta perspectiva jurídica. Dicho de otra manera, el que no puedan modificarse los hechos declarados probados por los jueces y tribunales es diferente de que no pueda modificarse la valoración jurídica de esos hechos, valoración que está, en la mayor parte de los casos, en la base misma de la petición de amparo”⁴⁴.

92. Como se aprecia, lo que no puede hacer el Tribunal es “revisar los hechos declarados probados por el Juez ordinario, en lo que toca a la existencia misma de tales hechos”⁴⁵. O bien, lo que se prohíbe “a este Tribunal es que entre a conocer de los ‘hechos que dieron lugar al proceso’ cuando la violación del derecho fundamental, cometido por el órgano judicial, lo sea ‘con independencia de tales hechos’ o, lo que es lo mismo, lo que veda dicho precepto es el conocimiento de los hechos que sustentan una pretensión ordinaria (penal, civil o administrativa), que pudiera estar en conexión con una pretensión de amparo, nacida como consecuencia de una violación por el órgano judicial de un derecho fundamental; debiendo este Tribunal limitar, en tal caso, su examen a los hechos que fundamentan esta última pretensión constitucional”⁴⁶.

93. En fin, que una cosa es mirar los hechos y otra, sustancialmente diferente, es revisarlos. Y es esto último lo que se prohíbe hacer al Tribunal Constitucional. En este sentido, el Tribunal Constitucional puede mirar los hechos y, desde esa mirada, realizar las comprobaciones que sean pertinentes –entre ellas, la fundamental de que se haya producido una violación de un derecho fundamental–.

94. Todo esto adquiere mayor relevancia, cuando se atiende la clara indicación de la realidad: tal como ha ocurrido en España –según ha revelado el ex Magistrado del Tribunal Constitucional español, Pablo Pérez Tremps–, también en nuestro

⁴⁴ Pérez Tremps, Pablo. *El recurso de amparo*. Op. cit., p. 301.

⁴⁵ STC 50/91. En: Fernández Farreres, Germán. Op. Cit., p. 186.

⁴⁶ STC 59/90. En: Fernández Farreres, Germán. Op. Cit., p. 185.



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

país, las violaciones a derechos fundamentales reclamadas en el marco de estos recursos son usualmente procesales⁴⁷, cuya comprobación es objetiva y supone un riesgo mínimo, por no decir inexistente, de que el Tribunal violente los límites y pase a revisar los hechos.

95. Así, la imposibilidad de revisar los hechos es una norma mal entendida que ha conducido a una conclusión equivocada –la imposibilidad de verificar la violación de un derecho fundamental a la entrada del recurso– y, consecuentemente, a desvirtuar sus requisitos de admisibilidad.

IV. SOBRE EL CASO CONCRETO

96. En la especie, el recurrente alega que hubo violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso por la falta de motivación de las decisiones, los principios de irretroactividad de la ley y de seguridad jurídica, así como la afectación al derecho al trabajo.

97. Para fundamentar la admisibilidad del recurso, el Pleno determinó que se verificaban todos los requisitos dispuestos en el artículo 53.3 de la referida ley núm. 137-11; esto sin previamente verificar que, en la especie, se aprecia vulneración a derechos fundamentales.

98. Discrepamos de tal postura puesto que, tal y como hemos explicado previamente, de conformidad con las disposiciones del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional debe admitir el recurso, pero fundado en la comprobación de las violaciones invocadas. En efecto, el Tribunal Constitucional debe primero verificar la vulneración a un derecho fundamental y, a partir de esa verificación, continuar con la evaluación de los requisitos posteriores.

⁴⁷ Es eso, justamente, lo que se aprecia al analizar los recursos de revisión de decisión jurisdiccional interpuestos ante el Tribunal Constitucional dominicano: de sesenta y ocho (68) analizados al nueve (9) de junio del año dos mil catorce (2014), en cincuenta y cinco (55) lo que se invoca es la violación de la tutela judicial efectiva y del debido proceso.



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

99. Entonces, sólo en el caso en que exista una violación a algún derecho fundamental, se procederá a la verificación de los requisitos establecidos en los literales a), b) y c), así como el párrafo (especial transcendencia), todos del artículo 53.3. El Tribunal siempre debe evaluar la concurrencia de estos cuatro requisitos, luego de que verifique la existencia de una vulneración a un derecho fundamental, y no limitarse a indicar que el recurrente los alegó o que eventualmente se podrían cumplir los mismos.

100. Enfatizamos que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional es un recurso excepcional y extraordinario que debe pasar por un filtro para poder ser admitido. Por tanto, la evaluación exhaustiva de estos requisitos es imprescindible para el buen funcionamiento de esta figura procesal constitucional.

101. En el caso que nos ocupa, como advertíamos antes, se verificaba una vulneración a derechos fundamentales, por los motivos que explicamos a continuación:

101.1. Mediante la referida sentencia 306, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como corte de casación, rechazó el recurso interpuesto Mallid Giovanni Mustafá Marte y Eduardo Robinson López, contra la Sentencia núm. 426/2012 dictada por la Corte de Apelación de Trabajo del Departamento Judicial Santiago, alegando, entre otros motivos, que ya esa misma Suprema Corte de Justicia en funciones de Tribunal Constitucional había declarado acorde con la Constitución la Ley núm. 187-07 sobre pasivo laboral, por lo que no se verificaban las violaciones argüidas.

101.2. Sin embargo, tal y como exponen los recurrentes, estos no han cuestionado ni cuestionan la constitucionalidad de la indicada ley, sino que plantean –como lo plantearon en el recurso de casación–, que la referida norma no puede serle aplicada de manera retroactiva, pues esto atenta contra



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

principios pilares del Derecho, como son el principio de irretroactividad de la ley y la seguridad jurídica.

101.3. Para sustentar su argumento principal, la parte recurrente advierte que la demanda laboral que incoó el treinta (30) de mayo de dos mil siete (2007) en contra de la hoy recurrida, fue interpuesta antes de la promulgación y entrada en vigencia de la referida ley núm. 187-07, publicada en la Gaceta Oficial núm. 10429, del nueve (9) de agosto de dos mil siete (2007).

101.4. Sobre el particular, hemos podido verificar que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, apoderada del recurso de casación, aunque reiteró que ya se había declarado la constitucionalidad de la norma, no respondió los planteamientos de la parte recurrente, punto neurálgico de su recurso: la inaplicabilidad de la ley posterior a un asunto sometido al contradictorio previamente, afectando alegados derechos adquiridos y situación jurídica consolidada.

101.5. Es conveniente recordar que, sobre el particular, ya este tribunal constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse, estableciendo que para determinar cuál legislación aplicar, será necesario verificar si los accionantes tenían un derecho adquirido (TC/0013/12). Esto así, pues la Constitución que rige dispone en su artículo 110 los principios de irretroactividad de la ley y de seguridad jurídica, en ocasión de los cuales, cuando se tienen derechos adquiridos, o frente a situaciones jurídicas consolidadas, la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surta la consecuencia que el



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

interesado esperaba de la situación jurídica consolidada, esto es una expectativa legítima.

101.6. En tal sentido, tomando en consideración los criterios ya fijados por este tribunal constitucional mediante el reiterado precedente, era –y sigue siendo– el deber de los tribunales del orden judicial –en este caso la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia–, no sólo responder al argumento principal del recurso de casación del que fue apoderado, sino, además, responderlo tomando en consideración las decisiones e interpretaciones que realice este tribunal constitucional.

101.7. Tal obligación no puede omitirse bajo el argumento de que “*lo que no está expresamente prohibido por la ley, está permitido*”. Este es un principio liberal, cuya interpretación siempre será en favor del individuo como tal; pero que, en cuanto al Estado, sus órganos, instituciones y funcionarios, la regla es –en virtud del principio de legalidad de sus actuaciones– que lo que no le está expresamente permitido por la ley, le está prohibido.

101.8. En la especie, de manera muy particular, debemos partir de que la legislación laboral tiene como objetivo principal la protección Estatal del trabajo como función social, a los fines de garantizar el bienestar humano y la justicia social, y regular los derechos y obligaciones de los trabajadores y los empleadores⁴⁸.

101.9. Y es que cuando hablamos de relaciones jerárquicas, dicho principio encuentra matices o limitaciones, como sucede en el caso de la relación empleador-trabajador, ya que la ley pone límites al empleador con el objeto de que se respeten los derechos fundamentales del trabajador. Estos límites a las facultades del empleador–que han de ser razonables– los debe establecer

⁴⁸ Principios I y III, Código de Trabajo.



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

únicamente el legislador, y en el ejercicio de tales facultades, jamás pueden derivarse consecuencias lesivas a la Constitución y a los derechos fundamentales de los trabajadores.

101.10. Esto tiene su razón de ser en el hecho de que, de la omisión del deber de estatuir, pueden derivarse y concretizarse vulneraciones a otros derechos fundamentales. Es lo que podría suceder en la especie. Si se admite que la liquidación anual de los trabajadores era una práctica no dispuesta en el Código de Trabajo, que es la norma que regula todo lo concerniente a los contratos de trabajo por tiempo indefinido; debe admitirse también que era una práctica ilegal (si no es legal, es ilegal) y una práctica controvertida, es decir, una práctica no pasiva, ni siquiera con la entrada en vigencia de la referida ley núm. 187-07. Asimismo, debe admitirse que, de la aplicación de esa práctica, antes de su reconocimiento legislativo, se podía deducir una reducción en las obligaciones del empleador, que afectaría la economía y patrimonio de los trabajadores, provocando una conculcación a las prerrogativas que se derivan del derecho fundamental al trabajo, consagrado en el artículo 61 de la Constitución.

101.11. A través de sus resoluciones, los tribunales del orden judicial tienen el deber de conservar el equilibrio adecuado entre los derechos y las obligaciones que emanan del contrato de trabajo, instrumento mediante el cual se modula el derecho fundamental que consagra nuestra Carta Magna.

101.12. Resulta entonces que, en la especie, de la inobservancia de los principios de irretroactividad de la ley y de seguridad jurídica, puede derivarse una cadena de violaciones a derechos fundamentales; y por este motivo la omisión de estatuir en la que incurrió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, debía ser sancionada con la nulidad de su decisión.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

101.13. Como señalara antes este tribunal constitucional, los tribunales tienen el compromiso de dictar decisiones motivadas como parte de la sujeción a la garantía constitucional del debido proceso; enfatizando así que *“reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general, con las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso por falta de motivación”* (TC/0009/13).

101.14. Tal y como ha señalado este mismo Tribunal, la debida motivación de las decisiones es una de las garantías del derecho fundamental a un debido proceso y de la tutela judicial efectiva, consagrados en las disposiciones de los artículos 68 y 69 de la Constitución, derechos que, en la especie, se vulneran ante la ausencia de pronunciamiento alguno sobre el planteamiento principal de los recurrentes en ocasión del referido recurso de casación.

102. En el presente caso, el Pleno, al analizar el fondo de la cuestión, señala que no hubo vulneración a derechos fundamentales, conclusión de la cual discrepamos y que, por demás, debió verificar al analizar la admisibilidad del recurso.

103. Tal y como afirmamos, la comprobación de la violación a derechos fundamentales es una cuestión que determina la admisibilidad del recurso, y no la evaluación de fondo del mismo. Una vez comprobado que ha habido violación alguna, entonces procedía evaluar la concurrencia de los requisitos exigidos en los literales a, b, c, y en el párrafo, del referido artículo 53. En la especie, resultaban inexigibles los requisitos previstos en los literales a y b, por los motivos que hemos expuesto anteriormente; y respecto del literal c, sin duda, la violación verificada era imputable al órgano decisor. La especial trascendencia del asunto residía en la necesidad de continuar desarrollando su jurisprudencia sobre la debida motivación



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

de las decisiones, y sobre los principios de irretroactividad de la ley y seguridad jurídica.

104. Finalmente, consideramos que, en la especie, en efecto, se verificaba la violación a derechos fundamentales, por lo que el Tribunal Constitucional, comprobándolo y admitiendo el recurso, de conformidad a las disposiciones del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, debió acogerlo en cuanto al fondo, anular la sentencia impugnada, y remitirlo a la Tercera Sala de la Suprema Corte, a los fines de que conozca nuevamente el caso, con estricto apego al criterio antes expuesto.

105. Por todo lo anterior, disentimos de la decisión dictada por este tribunal constitucional.

Firmado: Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal Constitucional, que certifico.

Julio José Rojas Báez
Secretario